

Auto: AI-020
Proceso: Verbal /Recusación
Demandante: Representaciones y Distribuciones Hospitalarias S.A.S
Demandado: Caja de Compensación Familiar de Antioquia-Comfama-
Radicado: 05001 31 03 015 2013 00093 04.
Mag. Ponente: Julián Valencia Castaño
Asunto: Resuelve recusación.
Tema: Evocación de las causales 2, 7 y 9 del art. 141 del Código General del Proceso.

**TRIBUNAL SUPERIOR
DISTRITO JUDICIAL DE MEDELLÍN
-SALA UNITARIA CIVIL DE DECISIÓN-**

Medellín, veinticuatro (24) de febrero de dos mil veintitrés (2023).

Procede la Sala a resolver la recusación formulada por el apoderado judicial de la sociedad Representaciones y Distribuciones Hospitalarias S.A.S -REDIHOS S.A.S- en contra de todos los magistrados que integran la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, con ocasión de las causales previstas en los numerales 2, 7 y 9 del artículo 141 del C.G.P.

ANTECEDENTES

El apoderado de la parte demandante mediante memorial del 19 de diciembre del 2019 recusó directamente a la Magistrada María Ecluides Puerta Montoya y por ahí mismo a los integrantes de la Sala Tercera de Decisión, porque, a su juicio: *“siempre apoyaron incondicionalmente su postura y su sentencia ilegal”*, así como –de paso-, no se molestó en recusar a todos y cada uno de los demás magistrados que conforman la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, con sustento en la existencia de una denuncia penal -por prevaricato-, adelantada en contra de la citada funcionaria judicial, hecho que hizo extensivo a todos los miembros de la Sala Civil del Tribunal *“por ser allegados a dicha funcionaria”*.

A pesar que los anteriores reparos fueron formulados exclusivamente en contra de la citada Magistrada, quien en auto del 19 de diciembre del 2019 no aceptó la recusación y en su defecto dispuso su remisión, y así se continuó sucesivamente por los Magistrados que en su momento conformaban con ella la Sala tercera de decisión Civil, como lo son los doctores

José Gildardo Ramírez Giraldo -24 de febrero del 2020- y, Martha Cecilia Ospina Patiño -4 de septiembre del 2020-; empero, curiosamente, la doctora Ospina Patiño, debiendo dirigir la actuación a la Sala Cuarta de decisión para que en orden alfabético resolviera la recusación el magistrado que seguís en turno, decidió enviarlo pero en orden alfabético al doctor Sergio Raúl Cardoso González, quien el 5 de febrero del 2021 negó la recusación y así sucesivamente lo hicieron los magistrados, Martín Agudelo Ramírez -12 de abril del 2021-, José Omar Bohórquez-14 de abril del 2021-, Ricardo León Carvajal Martínez -3 de mayo del 2021-, Luis Enrique Gil Marín -10 de mayo de 2021- Martha Cecilia Lema Villada -19 de octubre del 2022-, Gloria Patricia Montoya Arbeláez -24 de enero de 2023, Juan Carlos Sosa Londoño -30 de enero del 2023-, quien, negada la recusación, dispuso la remisión a mi despacho, recusación que por razones obvias no puedo entrar a negar ni a resolver, previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es importante precisar que el legislador, consciente de que el actuar de los funcionarios judiciales puede estar impregnado de sucesos que llegan a comprometer su imparcialidad, instituyó una serie de causales susceptibles de ser invocadas por los jueces de causa a manera de impedimento y por las partes a manera de recusación, para sustraer saludablemente al funcionario del conocimiento del asunto sometido a su juicio y garantizar la imparcialidad requerida. Sin embargo, esos impedimentos y recusaciones -tanto los de carácter objetivo como subjetivo-, se pregonan no del Cuerpo Colegiado en sí, sino exclusivamente respecto del Magistrado sustanciador y de los demás que conforman la sala de decisión, en cuanto personas naturales, para separarlo o separarlos del conocimiento del asunto que por reparto les correspondió.

Al respecto, me permito citar la providencia AP093-2021 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, situación análoga que es aplicable al caso que aquí nos convoca y, de la cual destaco lo pertinente:

“En ese contexto, por tanto, las taxativas causas que dan lugar a separar del conocimiento de un caso determinado a un juez o magistrado no pueden deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, porque se trata de reglas con

naturaleza de orden público, fundadas en el convencimiento legislativo de que son esas y no otras las circunstancias que impiden que un funcionario judicial conozca de un asunto, porque de continuar vinculado a la decisión comprometería la independencia de la administración de justicia y quebrantaría el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido por un tribunal imparcial.

Los impedimentos y recusaciones tanto los de carácter objetivo como subjetivo, tienen así a su base una serie de circunstancias que afectan la imparcialidad e independencia, no del juzgado o corporación en cuanto entes jurídicos a los que constitucional y legalmente les corresponde una serie de funciones, sino las del Juez o Magistrado en cuanto persona natural, para decidir en el asunto sometido a su consideración (...)

Todas las causales, sin excepción, se predicen del funcionario judicial en tanto persona según así se lee en cada una de aquellas y no del ente en el cual funge, de modo que, los impedidos o recusados son los jueces o los magistrados y no, en este último caso, la Corporación en cuanto a entidad jurídica, de la cual hagan parte". Como la Corte Suprema de Justicia ejerce sus diversas funciones a través de Salas, es apenas obvio que las recusaciones no se pueden proponer en relación con todos sus miembros, sino exclusivamente con respecto a aquellos que integran la específica Sala que tiene a su conocimiento el determinado asunto, es decir, en este caso, sólo pueden formularse en torno a quienes integramos la Sala conformada con arreglo al artículo 235.7 de la Constitución.

Así lo ha entendido la Jurisprudencia de la Sala de Casación cuando frente a una recusación propuesta en relación con todos los miembros de la Sala Penal de un Tribunal "aquella sólo puede ser planteada frente a los magistrados integrantes de la Sala de Decisión encargada de adelantar la etapa de juzgamiento y no de manera generalizada sobre todos los integrantes de la Sala Penal del Tribunal (...)

Recapitulando: las recusaciones tienen causales taxativas; no son susceptibles de analogía; se predicen de los funcionarios judiciales y no de los entes jurídicos en los cuales fungen, así las decisiones se adopten en nombre de éstos; **no pueden formularse en relación con todos los miembros de una Corporación o Sala en general, sino de aquellos que componen la específica Sala a la cual se le haya asignado el conocimiento del asunto, de lo contrario sería viabilizarlas respecto de funcionarios judiciales que ni siquiera tienen la competencia concreta sobre el caso.** (Subrayas ajenas al texto).

También resulta claro que cuando la parte procesal formula una recusación, está obligada a señalar con precisión la norma que expresamente contiene el supuesto de hecho y a expresar con claridad las razones que la llevan a solicitar que el funcionario o funcionarios judiciales se aparten del conocimiento del proceso, lo que a su vez comporta una carga específica sobre la indicación de su alcance y contenido, tanto que una argumentación insuficiente puede conducir a su rechazo, como cuando se plantea una sustentación genérica y abstracta.

Con ese panorama, al estudiar los argumentos expuestos por el apoderado de la parte demandante, no se observan nexos entre los fundamentos fácticos y la recusación invocada a priori contra los integrantes de la Sala Civil del Tribunal, cuerpo colegiado que no es el juez natural para resolver su caso, razón potísima por la cual no podía ni puede recusar indiscriminadamente a todos los miembros que integran la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, porque –se repite– como Cuerpo Colegiado no tiene competencia para tomar decisiones jurisdiccionales que se enfilen en interés del togado; como tampoco se puede dar el lujo el interesado de traer circunstancias anteriores en contra de algún magistrado para tratar de tipificar contra él una recusación, cuando ni de lejos ese magistrado tiene el conocimiento del asunto, máxime cuando, se itera, que las causales de recusación no pueden dirigirse de manera general y/o abstracta contra una corporación en general, sino que, en estricto sensu, debe recaer en un determinado funcionario y/o funcionarios con una competencia que ya han asumido por reparto para tramitar y decidir un pleito, pero nunca contra los demás jueces o miembros de un Tribunal que tan siquiera tienen competencia real y concreta sobre determinado asunto.

Además, que la recusación siempre deberá constituirse previamente al hecho que la origina, sin que pueda recaer sobre apreciaciones o especulaciones del denunciante que se imagine hacia el futuro y, lo que es más grave, que no puede ir en contra de los demás integrantes de una sala especializada de un Tribunal, personas que tan siquiera tienen competencia real frente al caso en concreto, mismo que ya le fue repartido a un magistrado en particular y a una sala en especial, sin que pueda trascender a los demás, quienes solamente podrían ser recusados a medida que vayan prosperando las anteriores recusaciones y en la medida que se vaya integrando la sala con los demás magistrados que siguen en turno.

En razón de lo expuesto, considera este suscrito que en el caso sub judice, una vez la Magistrada María Ecluides Montoya Puerta y los magistrados que en aquel momento integraban la Sala Tercera de Decisión -doctores José Gildardo Ramírez y Martha Cecilia Ospina-, quienes denegaron la recusación, luego, entonces y por mandato del CGP, le correspondía al Magistrado de la Sala de

Decisión que le siguiera en turno decidir la recusación, tal y como lo prevé el inciso 6 del artículo 143 del C.G.P “Si se recusa a todos los magistrados de una sala de decisión, cada uno de ellos deberá proceder como se indica en el inciso 3°, siguiendo el orden alfabético de apellidos. Cumplido esto corresponderá al magistrado de la siguiente Sala de decisión, por orden alfabético de apellidos, tramitar y decidir la recusación”. Último punto que ha sido objeto de de pronunciamiento por Sala Penal de la la Corte Suprema de Justicia y que en el caso objeto de estudio, mutatis mutandis resulta aplicable a este caso en concreto, pues, “(i). Cuando el incidente de recusación se proponga contra Magistrados de Tribunal, se debe tramitar en su integridad al interior de la Sala de Decisión Penal respectiva. (ii). Si la recusación se dirige contra la totalidad de quienes componen una de las Salas de Decisión Penal del respectivo Tribunal, resolverá la que le siga en turno”¹.

Así las cosas, en el caso que hoy ocupa la atención de este magistrado, como para la fecha en que se presentó la recusación en contra de la Magistrada María Euclides Puerta Montoya -19 de diciembre del 2019- correspondía a la Sala Tercera de Decisión, que para ese momento estaba conformada por la Magistrada Martha Cecilia Ospina Patiño y el Magistrado José Gildardo Ramirez Giraldo, corresponderá, en consecuencia, a la Sala Cuarta de Decisión, propiamente al Magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, primero por orden alfabético de apellidos, decidir la presente recusación, conforme a lo expuesto en la parte motiva.

En mérito de lo expuesto, el **Tribunal Superior de Medellín**, en Sala Unitaria de Decisión Civil,

III. RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que la recusación sólo puede pregonarse en contra de los Magistrados que integran la Sala de Decisión y no frente a todos los miembros que integran la Sala Civil del Tribunal Superior de Medellín, conforme a lo expuesto en parte motiva.

¹ Véase AP1754-2022 Radicado No 61406 del 4 de mayo del 2022, Magistrado Ponente Diego Eugenio Corredor Beltrán.

SEGUNDO: En consecuencia, de lo anterior, se **ORDENA** la devolución del expediente al Magistrado Juan Carlos Sosa Londoño, para que asuma la decisión sobre la recusación de los tres magistrados de la Sala Tercera de Decisión Civil del tribunal Superior de Medellín.

NOTIFÍQUESE

JULIÁN VALENCIA CASTAÑO
Magistrado

Firmado Por:

Julian Valencia Castaño

Magistrado Tribunal O Consejo Seccional

Sala 010 Civil

Tribunal Superior De Medellín - Antioquia

Este documento fue generado con firma electrónica y cuenta con plena validez jurídica,
conforme a lo dispuesto en la Ley 527/99 y el decreto reglamentario 2364/12

Código de verificación: **d2c3e488ceec4c0334ea459c0ad76b364d10512ac37363d29621967ab0a6c4b8**

Documento generado en 24/02/2023 12:25:10 PM

Descargue el archivo y valide éste documento electrónico en la siguiente URL:

<https://procesojudicial.ramajudicial.gov.co/FirmaElectronica>